

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXXVII — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1969 — N° 150

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

MANUEL SANHUEZA CRUZ
JULIO SALAS VIVALDI
CARLOS PECCHI CROCE
PABLO SAAVEDRA BELMAR
RENATO GUZMAN SERANI
MARCEL POMMIEZ ILUFI

(Delegado Estudiantil)

★

★

★

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA — CONCEPCION (CHILE)

utilización de experiencia y rendimiento en etapas de culminación de la carrera judicial.

La creciente demanda de servicio judicial, hace necesaria la revisión del mismo. No creemos que creando nuevos Juzgados con las estructuras actuales, se solucione nada; ello es sólo un parche, un mal remedio a un régimen absoluto en el cual el profesional Abogado no encuentra su plena realización. Es útil rever el sistema de la doble instancia, la utilidad de las relatorías, el papel pasivo de las Cortes de Apelaciones, el trabajo agobiador e inhumano a que se ve sometido el Juez de primera instancia, la posibilidad de transformar a los jueces de primera instancia en tramitadores o instructores y a las Cortes en órganos sentenciadores, la supresión de los Relatores para incorporar este personal a actividades creativas en la Administración de Justicia. En fin, existen muchas fórmulas susceptibles de barajar, métodos modernos que introducir en la actividad judicial, en términos que al Abogado se le presente un campo ocupacional dentro de la Magistratura, en el cual se abran amplias posibilidades de realización profesional y personal.

* * *

Como mecanismos aptos para enfrentar los problemas planteados, podríamos señalar los siguientes:

a) Creación de la carrera funcionaria dentro de la Magistratura, en la cual rigieran como criterios determinantes en la carrera del colega Magistrado, la antigüedad y el mérito;

b) El reconocimiento oficial, como organismo gremial, de la Asociación Nacional de Magistrados;

c) Establecimiento de estudios especiales en las Facultades de Derecho para promover el ingreso ocupacional del Abogado hacia la Magistratura, y la práctica de cursos de perfeccionamiento en el país y en el extranjero, como un medio de superación profesional permanente.

INFORME DE LA COMISION N° 2 AL PLENARIO

A.—Labor del Abogado.—El campo de acción del Abogado se ha estrechado como consecuencia de la multiplicación de los fenómenos sociales y en razón, además, de que los estudios de Derecho no han evolucionado para incluir dichos fenómenos en su integridad social, económica y política y la nueva técnica jurídica a ellos aplicable.

El Abogado ha sido desplazado de parte del ámbito de acción que siempre le ha sido propio; es decir, otros profesionales, menos aptos en este campo, se han apropiado de lo jurídico, de lo técnico jurídico, con deterioro del Derecho y por ende de la sociedad.

B.—Función social del Abogado.—Se hace necesario modificar el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, por cuanto en la actualidad las funciones del Abogado se extienden más allá de su labor puramente asesora de las partes en litigio ante los Tribunales de Justicia, ya que es evidente que gran parte de la actividad general de este profesional está orientada también hacia otros campos del fenómeno social.

C.—Limitaciones en el campo de acción del Abogado.—Los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, el primero, en cuanto obliga a toda persona que haga presentación ante los Tribunales

LA ABOGACIA, SU SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

77

ser patrocinada por abogado, y el segundo que establece que nadie puede intervenir o comparecer ante ellos sino por medio de abogados, fueron dictados por motivos de conveniencia social.

Las excepciones o limitaciones a los principios generales de patrocinio y comparecencia las incluyó el legislador en el artículo 42 de la ley citada.

Siendo en la actualidad mucho mayor el número de abogados y más complejos los derechos y defensas de las partes, se estima que las limitaciones del referido artículo 42 deben ser sometidas a reducción.

Por otra parte existe una tendencia legislativa que conlleva la idea de eliminar la asesoría del jurista, citándose por vía de ejemplo leyes como las de Terminación del Contrato de Trabajo, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de Organización de los Juzgados de Policía Local, en las cuales se ha eliminado la obligatoriedad del patrocinio.

Esta tendencia del legislador es perjudicial para aquellos a quienes se pretende favorecer, ya que generalmente conduce a estados de indefensión motivados, justamente, por la ausencia de asesorías de abogados.

Además, se hace necesario ir a una modificación de las leyes que han eliminado la obligación del patrocinio, de manera que se restablezca dicha exigencia general.

D.—Ampliación del campo de acción del Abogado.—Existe un vasto género de actividades en que la actual falta de intervención de abogados origina defectos, abusos y aún verdadera denegación de justicia. Estas actividades son atinentes a los Tribunales, a las Notarías, a la Abogacía y otras de orden general.

Sobre estas materias se proponen las siguientes soluciones específicas:

A) Tribunales y Notarías.

1º) Toda escritura pública o documento protocolizado en que se anoten contratos o convenciones patrimoniales debe ser extendido a base de minuta redactada por abogado. Los documentos a protocolizarse deben llevar firma de abogado. Además, tratándose de cualquiera escritura pública, el abogado redactor debe firmar el documento, bajo sanción de nulidad.

2º) Debe irse a la creación de Jueces Instructores, solución que prevalece sobre la de restablecer el Ministerio Público. El proceso penal, en la actualidad, es totalmente paradójico y antijurídico.

3º) Se propicia el aumento del número de tribunales, de Salas en las Cortes de Apelaciones y de los funcionarios que se desempeñan como Relatores.

4º) Deben crearse en todas las Cortes, Salas del Trabajo, con el fin de hacer más expedita y efectiva la justicia laboral.

B) Abogacía.

Se propone una mayor intervención del Abogado en beneficio social y en el de los interesados, especialmente en el cumplimiento de los derechos de estos últimos:

1º) Es indispensable modificar el artículo 255 del Código Orgánico de Tribunales, quedando éste con la mención de que "sólo pueden ser nombrados árbitros los abogados habilitados para ejercer la profesión".

2º) Los árbitros, con la modificación conceptual anterior, deben estar premunidos de imperio para el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias. Se modifica el Código Orgánico de Tribunales diciendo en el Título IX, pertinentemente: "Son aplicables a los Jueces Arbitros los artículos 11, 12 y 13 de este Código".

3º) Se proponen medidas para hacer más eficaz la persecución del rabelismo, puesto que este tipo delictual lesiona a la Administración de Justicia y a la Abogacía, ya sea en lo material, o en la integridad de su concepto:

a) Sacar la configuración del tipo desde el artículo 53 de la Ley del Colegio de Abogados y llevarla a un título especial, que se crearía en el Código Penal, llamado "Delitos contra la Administración de Justicia".

b) Disponer que en los delitos anteriores la prueba se aprecia en conciencia.

c) Que en el mismo título se colocarán todos los demás delitos similares como los de prevaricación, perjurio y otros.

d) Que todos los Tribunales están obligados a comunicar a los respectivos Colegios de Abogados toda denuncia, querrela o pesquisa judicial referente al ejercicio ilegal de la profesión de Abogado.

C) Medidas de otro orden.

1º) Que el Decreto con Fuerza de Ley N° 205, de 1960, que autorizó la constitución de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, sea pertinentemente modificado a fin de que no sea legal a dichas asociaciones cargar honorarios de abogado cuando el interesado concurra con un letrado elegido por él mismo.

Se discutió la proposición en el sentido que se propone en la letra b), página 3, del trabajo "Campo ocupacional del Abogado"; pero en definitiva, sin oposición de nadie, se acordó lo anterior.

2º) **Conflictos colectivos del trabajo.**—Un alto porcentaje de ellos son rechazados, ya en su inicio, ya en la tramitación, por incumplimiento de requisitos legales reglamentarios.

Al respecto se propone:

a) Modificar el Código del Trabajo en su párrafo VIII del título III del Libro IV, "Disposiciones comunes a la tramitación de los Conflictos Colectivos", agregando un artículo que dice que "las partes en conflicto deberán estar patrocinadas (no representadas) por abogado habilitado" ante las Juntas Permanentes de Conciliación y ante los Tribunales Arbitrales".

b) Modificar el artículo 592 del Código del Trabajo, agregando que "la petición escrita (pliego de peticiones) será patrocinada por abogado habilitado".

3º) **Abogados Funcionarios.**—No están en situación ni pueden intervenir en otros asuntos que los propios de sus labores. Ejemplo: atención a los familiares de los empleados del servicio en que laboran, en asuntos privados. La desvirtuación del contrato, o de la función, es una competencia desleal.

4º) Funciones jurisdiccionales o directamente relacionadas con la Ciencia del Derecho, desempeñadas por no letrados.—La Comisión mencionó y estuvo de acuerdo en que las siguientes funciones debían ser cumplidas por abogados:

a) Los funcionarios de la Tesorería General de la República, de la Dirección General de Impuestos Internos y de los demás Servicios públicos, semifiscales o de administración autónoma, que dicten resoluciones sobre conflictos jurídicos con los administrados, deben ser abogados, y dichos Organismos deberán contemplar en sus plantas de personal, un cargo de estos profesionales, como mínimo, por cada departamento;

b) Los Fiscales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile deben ser abogados y, asimismo, los miembros que integran las Cortes Marciales;

c) Los Procuradores del Número ante las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema deben ser abogados. A este respecto, se agrega que los abogados pueden representar a sus patrocinados ante dichos tribunales, debiendo en este sentido ser modificado el artículo 398 del Código Orgánico de Tribunales.

5º) Defensa Oral.—Se propone que en el artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales, a continuación de la palabra "profesión", y en punto seguido, se agregue lo siguiente: "La defensa oral es un derecho que ningún tribunal, sea ordinario, especial, arbitral o administrativo puede negar a todo abogado habilitado. El incumplimiento de esta disposición se estimará como un abuso que deberá corregirse por el superior respectivo con medidas disciplinarias o con la nulidad de la resolución o sentencia".

Intervención del Colegio de Abogados.

1º) Que el Consejo General del Colegio de Abogados redacte, como proyecto de ley, en los casos específicos, las conclusiones anteriores.

2º) Que se agregue una letra al artículo 13 de la Ley del Colegio de Abogados, en los siguientes términos: "Con la aprobación de los dos tercios de los Consejeros presentes se podrán hacer aplicaciones de fondos para fines específicos directamente relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado".